

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-7327-2018 del Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve, se rechazó la demanda de acción civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, deducida en favor de **Alfredo Enrique Meneses Maldonado** y en contra del Fisco de Chile, en cuanto no se acreditó ni la responsabilidad del demandado en los hechos objeto de la acción, ni la existencia del daño moral reclamado por el actor.

Impugnada esa decisión únicamente por la parte demandante, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, la confirmó.

Contra el citado pronunciamiento, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo, disponiéndose traer los autos en relación por decreto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

Considerando:

PRIMERO: Que por el recurso de casación en el fondo se reclama la infracción de los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y; el artículo 131 de la Convención de Ginebra sobre el Tratamiento de prisioneros de Guerra.

Se sostiene por el impugnante que *“Es un error ignorar el hecho que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes. Al respecto, basta tener*



a la vista el Art. 63 de la citada Convención junto con la enorme cantidad de jurisprudencia que, desde hace varios años, viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo”. (Sic)

Arguye que, en parecer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, “*constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo han reconocido esta Corte (...) y la jurisprudencia de otros tribunales (...) (Caso Aloeboetoe y otros de 1993). En un fallo reciente, aplicando este criterio señala: Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados*”. (Sic)

Finaliza solicitando la nulidad del fallo impugnado a fin que se dicte una sentencia de reemplazo por la que “*se aumente la indemnización por daño moral deducida por su mandante de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo de esta presentación*”. (Sic)

SEGUNDO: Que de la sola lectura del arbitrio en análisis, surge que el mismo no cumple con los estándares formales exigidos para su interposición por el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se expresan en qué consisten los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida y, mucho menos, de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, limitándose el impugnante a señalar como infringida una serie de normativas internacionales –*tales como la*



Convención de Ginebra sobre el Tratamiento de prisioneros de Guerra y la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, además de citar diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de tribunales nacionales, sin explicitar de qué modo se ha incurrido por los juzgadores de la instancia en una errónea aplicación del derecho, ni como dichas normas se vinculan con el caso de autos.

TERCERO: Que, sin perjuicio de lo antes razonado, es menester consignar que la sentencia de primer grado *–confirmada en todas sus partes por el fallo impugnado–*, luego de hacer una relación de la prueba rendida por la parte demandante en su motivo quinto, concluye en su fundamento séptimo, que *“atendido el mérito de los antecedentes en cuanto no acreditó la responsabilidad del demandado en los hechos materia de la demanda, y en consecuencia tampoco si el demandante sufrió daño por ello, es que se proceder a rechazar la demanda”*.

No obstante aquello, los juzgadores del grado no se hicieron cargo de los documentos que fueron acompañados al proceso *–como ya se dijo, solo se limitaron a enunciarlos–*, en particular del oficio de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, en el que se da cuenta de las secuelas en la salud mental producto de las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura, en particular de aquellas sufridas por Alfredo Meneses Maldonado, reconocido como víctima por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura bajo el N° 14.881.

De este modo, no es posible encontrar en el fallo en estudio reflexiones que permitan dilucidar las circunstancias que llevaron a los jueces a resolver de la



forma en que lo hicieron, lo que prueba la ausencia de los requisitos que les ordena la ley en la dictación de la sentencia y que conlleva como sanción la nulidad.

CUARTO: Que con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del de Procedimiento Penal, puede este tribunal, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa.

En este caso, la anomalía surgió luego de la vista de los recursos, durante el estudio y análisis del fallo impugnado, advirtiéndose este tribunal que la sentencia en referencia adolece de tales defectos, sin que haya sido posible invitar a los abogados de las partes a debatir a su respecto, atendido el estado procesal en que se encontraban los autos.

QUINTO: Que, cabe recordar, en directa relación con lo señalado, que el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil prescribe que: *“Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán:...*

(...) 4°. Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia”.

SEXTO: Que, de este modo y como lo ha sostenido esta Corte, entre otros en el pronunciamiento Rol N° 4.567-2018, de 11 de febrero de 2019, la fundamentación de las sentencias constituye una garantía que tiende a evitar la arbitrariedad, pues permite conocer los motivos que sustentan la resolución,



imponiendo a los jueces la obligación de estudiar razonadamente los elementos de juicio reunidos, en términos que resulte entendible la aceptación o rechazo tanto de las pruebas rendidas como de las alegaciones y defensas planteadas, por lo que incumbe a los jurisdicentes del fondo argumentar en términos que permitan comprender las motivaciones que los conducen a su decisión.

SÉPTIMO: Que *-como ya se expresó-*, de la lectura del fallo impugnado se colige que el mismo no contiene consideraciones en las que se desarrolle la valoración de las probanzas rendidas en autos a petición de la parte demandante, en orden a acreditar tanto su calidad de víctima de violación a sus Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar, como las secuelas psicológicas y físicas producto de las torturas, golpizas y amenazas de que fue objeto por parte de agentes del Estado, lo que implica una omisión en el pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento de los juzgadores del grado, obviando con ello el requisito de validez de las sentencias a que se refiere el numeral sexto del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que dejaron de resolver el asunto controvertido, irregularidad que el artículo 768 N° 5 del mismo texto adjetivo considera como un motivo de anulación del fallo, irregularidad que presenta evidente influencia en lo dispositivo de la sentencia, pues, en rigor, ha impedido la resolución del asunto como en derecho corresponde.

OCTAVO: Que las deficiencias anotadas no pueden subsanarse sino con la invalidación del fallo que la contiene, por lo que esta Corte, de oficio, procederá a anularlo, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho y a los hechos de la causa.



NOVENO: Que por lo expresado en las motivaciones anteriores y de acuerdo con lo que previene el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, se tendrá por no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante.

Y de acuerdo, además, con lo previsto en los artículos 764, 765, 766, 775 y 786 del Código de Procedimiento Civil, **se invalida de oficio**, la sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Por lo decidido, **se tiene por no interpuesto el recurso de casación en el fondo** deducido por la parte demandante.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

Rol N° 137.703-2022

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y la Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M. No firma la Ministra Suplente Sra. Quezada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia.



HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO

Fecha: 24/08/2023 15:57:46

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO

Fecha: 24/08/2023 15:57:47

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO

Fecha: 24/08/2023 15:57:47

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA

Fecha: 24/08/2023 15:57:48



DBYCXHXXVTG

En Santiago, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos séptimo y octavo, que se eliminan

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

PRIMERO: Que, no se encuentra controvertido en autos que el actor fue detenido por agentes de la CNI con fecha 09 octubre de 1983, y llevado al centro de detención clandestino denominado “Agua Santa”, siendo golpeado y puesto en la llamada “parrilla”, para horas después ser dejado en libertad.

Tampoco se encuentra cuestionada en la especie, la circunstancia de que día 08 de junio de 1984, el actor nuevamente fue detenido por agentes de la CNI, para luego ser torturado a fin de que delatara a uno de sus compañeros – *simulando incluso un fusilamiento a su respecto*-, siendo liberado a las pocas horas, pese a lo cual continuaron los amedrentamientos, seguimientos y llamados hacía su persona.

En el mismo sentido, es un hecho de la causa que el demandante Orlando Enrique Gómez Cruz, figura bajo el N° 14.881 en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo que da cuenta del reconocimiento de su calidad de víctima de la acción ilícita de los agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar.

SEGUNDO: Que, la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta con alegar la



existencia del hecho dañoso y la relación con la víctima para plantear la pretensión, lo que en este caso no ha sido cuestionado.

Así, por lo demás, lo ha resuelto reiteradamente esta Corte, entre otros en los pronunciamientos Roles N° 23.441-2014, de 28 de abril de 2015, y N° 19.127-2017, de 6 de agosto de 2018.

TERCERO: Que, no obstante lo anteriormente expuesto resulta suficiente para indemnizar al actor por daño moral *-sufrido a consecuencia de las violaciones de que fue objeto a sus derechos humanos-*, es menester precisar que las secuelas psicológicas que dejó en el actor la acción ilegítima de los agentes estatales, se encuentran debidamente acreditadas con el mérito del Informe emitido por Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, en el que se expresan de modo general las secuelas físicas y psicológicas de quienes como el actor, han sido objeto de violaciones a sus Derechos Humanos.

CUARTO: Que, de otra parte, la indemnización del daño producido y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de derecho internacional consideradas *ius cogens* por la comunidad jurídica internacional. Dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha



incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

QUINTO: Que, como lo ha señalado anteriormente esta Corte, entre otros, en el pronunciamiento Rol N° 17.842-2019, de fecha 11 de octubre de 2019, el menoscabo moral, por su índole netamente subjetiva y porque su fundamento arranca de la propia naturaleza afectiva del ser humano, no es, sin duda, de orden puramente económico y no implica, en consecuencia, un deterioro real en el patrimonio de quien lo sufre, susceptible de prueba y de determinación directa, por lo que queda enteramente entregado a la regulación prudencial de los jueces de instancia, tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado.

SEXTO: Que, en ese entendido, la naturaleza del daño demandado obliga a que la determinación del monto dinerario que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, necesariamente lleva a que sea realizado *prudencialmente*, ante la necesidad de fijar con exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no lleva a que esa evaluación sea o arbitraria o antojadiza, sino por el contrario que ante la imposibilidad de concretarla sirviéndose de fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela, moderación y fundándose en los principios de equidad, a los que alude el numeral 5° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, lo que sin duda le entrega



mayor flexibilidad para dicha determinación, sin que tal ejercicio implique en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a esa decisión, toda vez que de ese modo se justifica la decisión relativa a los extremos de lo que se manda a pagar por el fallo.

SÉPTIMO: Que, zanjado lo anterior, y apreciando las probanzas rendidas en el proceso, relacionadas en el fundamento undécimo del fallo casado, y considerando además, que el actor estuvo privado de su libertad injustificadamente por dos días, período durante el cual fue objeto de torturas, malos tratos y amenazas por parte de quienes se encontraban constitucionalmente obligados a protegerle, se determina prudencialmente la indemnización de ese padecimiento en la suma de \$ 5.000.000 (cinco millones de pesos).

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 170, 186, 187 y 227 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 6, 38 y 19 Nros. 22 y 24 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de trece de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la acción civil deducida en estos autos; y en su lugar se resuelve que **se acoge** la demanda y, consecuencialmente, se condena al Fisco de Chile a pagar al actor Alfredo Enrique Meneses Maldonado la suma de cinco millones de pesos (\$5.000.000), por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral.

La cantidad ordenada pagar se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde que la presente sentencia



quede ejecutoriada y devengará intereses desde que el deudor se constituya en mora.

No se condena en costas al demandado por no haber sido completamente vencido.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

Rol N° 137.703-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y la Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M. No firma la Ministra Suplente Sra. Quezada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 24/08/2023 15:57:49

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 24/08/2023 15:57:50

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 24/08/2023 15:57:50

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 24/08/2023 15:57:51



En Santiago, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

